



REPÚBLICA ARGENTINA
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Período 134°

18ª Reunión - 8ª Sesión ordinaria - 16 de noviembre de 2016

Presidencia del señor presidente provisional del H. Senado, senador D. **Federico Pinedo**, y del señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, D. **Juan Manuel Abal Medina**

Secretarios: señor D. **Juan Pedro Tunessi** y señor D. **Helio Rebot**
Prosecretarios: señor D. **Mario Daniele**, señor D. **Eric Calcagno y Maillmann** y señor D. **Ángel Torres**

PRESENTES:

ABAL MEDINA, Juan Manuel
AGUILAR, Eduardo Alberto
AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia
ALMIRÓN, Ana Claudia.
ALPEROVICH, José Jorge
BASUALDO, Roberto Gustavo
BLAS, Inés Imelda
BOYADJIAN, Miriam Ruth
BRAILLARD POCCARD, Néstor
CABRAL ARRECHEA, Salvador
CASERIO, Carlos
CATALÁN MAGNI, Julio César
COBOS, Julio César Cleto
CREXELL, Lucila
DE ANGELI, Alfredo
DE LA ROSA, María Graciela
DURANGO, Norma
ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz
ESPÍNOLA, Carlos
FELLNER, Liliana Beatriz
FIORE VINUALES, María Cristina del Valle
FUENTES, Marcelo Jorge
GARCÍA, Virginia María
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIACOPPO, Silvia del Rosario
GIMÉNEZ, Sandra Daniela
GODOY, Ruperto Eduardo
GONZÁLEZ, Nancy
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
IRRAZÁBAL, Juan Manuel
ITURREZ DE CAPPELLINI, Ada del Valle
KUNATH, Sigrid Elisabeth
LABADO, María Esther
LEGUIZAMÓN, María Laura
LINARES, Jaime
LOVERA, Daniel
LUENZO, Alfredo
LUNA, Mirtha María Teresita
MARINO, Juan Carlos

MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
MARTÍNEZ, Ernesto Félix
MAYANS, José Miguel Ángel
MENEM, Carlos Saúl
MERA, Dalmacio
MIRKIN, Beatriz
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
ODARDA, María Magdalena
OJEDA, José Antonio
PAIS, Juan M.
PEREYRA, Guillermo Juan
PEROTTI, Omar
PÉRSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Ángel
PILATTI VERGARA, María Inés
PINEDO, Federico
RIOFRÍO, Marina Raquel
RODRÍGUEZ MACHADO, Laura
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROMERO, Juan Carlos
SACNUN, María de los Ángeles
SOLANAS, Fernando Ezequiel
URTUBEY, Rodolfo Julio
VARELA, Marta Lucía
VERASAY, Pamela Fernanda

AUSENTES, CON AVISO:

BARRIONUEVO, Walter Basilio
CASTILLO, Oscar Aníbal
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
MONTENEGRO, Gerardo Antenor
REUTEMANN, Carlos Alberto
ZAMORA, Gerardo

LICENCIA POR ENFERMEDAD:

ROZAS, Ángel

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional.
2. Homenaje en memoria del señor diputado nacional Daniel Tomas.
3. Consideración de versiones taquigráficas.
4. Asuntos entrados.
5. Licencia solicitada por el señor senador Rozas.
6. Retiro de un proyecto.
7. Mensajes solicitando acuerdos.
8. Consideración en conjunto de acuerdos.
 - Solicitud de acuerdo para promover a funcionarios de la categoría A, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. (O.D. N° 908/16.)
 - Solicitud de acuerdo para promover a funcionarios de la categoría B, ministros plenipotenciarios de primera clase. (O.D. N° 909/16.)
 - Solicitud de acuerdo para promover a funcionarios de la categoría C, ministros plenipotenciarios de segunda clase. (O.D. N° 910/16.)
 - Solicitud de acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital Federal al doctor Herminio F. Canero. (O.D. N° 952/16.)
 - Solicitud de acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital Federal al doctor Enrique Méndez Signori. (O.D. N° 953/16.)
 - Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón, provincia de Buenos Aires, al doctor Martín A. Ramos. (O.D. N° 954/16.)
 - Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza, al doctor Eduardo A. Puigdengolas. (O.D. N° 955/16.)
 - Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo criminal y correccional de San Isidro, provincia de Buenos Aires, al doctor Fernando Bazano. (O.D. N° 956/16.)
 - Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, al doctor Aurelio A. Cuello Murua. (O.D. N° 957/16.)
 - Solicitud de acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía N° 26, a la doctora Graciela A. Gils Carbó. (O.D. N° 958/16.)
9. Cuestión de privilegio. (S.-4.353/16.)
10. Cuestión de privilegio. (S.-4.354/16.)
11. Cuestión de privilegio. (S.-4.355/16.)
12. Mociones de preferencia.
13. Modificación del Plan de Labor.
14. Mociones de preferencia. (Continuación.)
15. Plan de Labor.
16. Consideración en conjunto de órdenes del día.
 - Declaración de interés por el Torneo Argentino de Selecciones de Hockey Indoor. (O.D. N° 874/16.)
 - Beneplácito por los logros alcanzados por la deportista Maira Arias. (O.D. N° 876/16.)
 - Declaración de interés por el evento deportivo Juegos Universitarios Regionales 2016. (O.D. N° 877/16.)

17. Consideración en conjunto de los órdenes del día con proyectos de ley.
 - Sustitución del artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. N° 584/16.)
 - Modificación del artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. N° 586/16.)
 - Modificación del artículo 54 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. N° 911/16.)
 - Modificación del artículo 71 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. N° 912/16.)
 - Modificación del artículo 75 del Régimen de Contrato de Trabajo. (O.D. N° 913/16.)
 - Régimen de promoción de pueblos rurales turísticos. (O.D. N° 914/16.)
 - Modificación del artículo 255 del Régimen de Contrato de Trabajo. (O.D. N° 916/16.)
 - Creación del programa nacional de rutas escénicas. (O.D. N° 917/16.)
 - Incorporación de los contenidos curriculares del folklore como bien cultural para todos los niveles del sistema educativo nacional. (O.D. N° 919/16.)
 - Modificación del artículo 11 de la Ley de Turismo. (O.D. N° 920/16.)
 - Modificación de la ley sobre Pensiones Maestros del Deporte. (O.D. N° 922/16.)
 - Institución del Día Nacional de la Animación Argentina. (O.D. N° 925/16.)
 - Declaración de interés nacional el emprendimiento cultural Trombonanza, en Santa Fe. (O.D. N° 926/16.)
 - Modificación de la Ley de Educación Nacional. (O.D. N° 928/16.)
 - Modificación de la Ley de Museos Nacionales. (O.D. N° 930/16.)
 - Declaración de fiesta nacional al Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, Mendoza. (O.D. N° 931/16.)
 - Modificación de la ley del trabajador rural – seguro de vida colectivo. (O.D. N° 940/16.)
 - Disposición de dar a conocer en lengua española el significado del nombre de los lugares denominados en lengua de los pueblos indígenas argentinos en todo el territorio de la Nación. (O.D. N° 942/16.)
 - Aprobación de la Ley de Promoción del Cambio en la Nomenclatura de los Espacios Vitales, Instrucciones, Barrios y/o Lugares Públicos. (O.D. N° 947/16.)
 - Modificación de la ley de tarjetas de crédito sobre el sistema de atención al cliente y denuncias. (O.D. N° 963/16.)
18. Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados. (O.D. N° 951/16.)
19. Desarrollo de la marina mercante nacional e integración fluvial regional (O.D. N° 822/16.) Creación del régimen de incentivos, promoción y desarrollo de la industria naval. (O.D. N° 823/16.)
20. Emergencia social y de las organizaciones de la economía popular. (O.D. N° 907/16.)
21. Día del Taquígrafo.
22. Emergencia social y de las organizaciones de la economía popular. (O.D. N° 907/16.) (Continuación.)
23. Régimen previsional especial de carácter excepcional para exsoldados combatientes de la guerra de Malvinas. (O.D. N° 699/16.)
24. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.
25. Tratamiento en conjunto de proyectos de comunicación, de declaración y de resolución.
 - Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta Patronales Nuestra Señora del Rosario. (S.-3.954/16.)

Declaración de interés a la trayectoria del ciclista Marcelo Daniel Linares, oriundo de la ciudad de Viedma, Río Negro. (S-4007/15)

Declaración de interés por la tarea que realiza la fundación Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, en ocasión de un nuevo aniversario en el mes de marzo de 2016. (S.-4.164/16.)

Declaración de interés a la labor desarrollada por la Asociación Civil Amigos de lo Nuestro. (S.-4.277/16.)

26. Apéndice.¹

- Actas de votación.
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
- Inserciones.

¹ El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en la versión impresa del Diario de Sesiones.

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 30 del miércoles 16 de noviembre de 2016:

Sr. Presidente (Pinedo).- Hay quórum. Damos por iniciada la sesión.

1. Izamiento de la bandera nacional

Sr. Presidente (Pinedo).- Invito al señor senador Gerardo Montenegro a izar el pabellón nacional, si está... No está.

Invito a la señora senadora Negre de Alonso a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.

Sra. Negre de Alonso.- Presidente: ¡es la tercera vez en quince años de mandato!

- *Puestos de pie los presentes, la señora senadora Negre de Alonso procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)*

2. Homenaje en memoria del señor diputado nacional Daniel Tomas

Sr. Godoy.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Ruperto Godoy.

Sr. Godoy.- Gracias, señor presidente: voy a ser muy breve.

Solicité la palabra para recordar y hacer un homenaje a un compañero, amigo, diputado nacional que falleció el viernes pasado de manera muy inesperada.

Quiero reconocer la figura de un hombre que tuvo una larga trayectoria política, una militancia muy intensa: fue concejal, dos veces diputado provincial, presidente de la bancada del PJ-Frente para la Victoria. Tuvo un período como diputado nacional y estaba cumpliendo su segundo período en ese cargo.

Era un hombre muy dedicado a su trabajo, dedicado a la política; un hombre comprometido con muchas convicciones, con el pensamiento nacional y popular.

Así que quería recordarlo en este momento porque a los sanjuaninos, y particularmente a quienes somos sus amigos, nos ha generado un vacío muy grande.

Por lo tanto, solicito que podamos rendir homenaje al diputado nacional Daniel Tomas.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo).- Si les parece bien, podemos hacer un minuto de silencio.

Sr. Pais.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pais.

Sr. Pais.- Complementando lo mencionado por el senador Godoy sobre Daniel Tomas, quiero señalar que era alguien que visitaba asiduamente el Senado. Integraba una comisión bicameral muy importante, que presidió, que es la Comisión Bicameral del Digesto. Trabajó codo a codo con diputados y senadores.

Era un hombre de la democracia que nos prestigió a todos, un hombre de bien y que realmente, cuando le cupo desempeñarse en un ámbito biparlamentario, bicameral, nos dejó un legado de trabajo, de hombría de bien y de generosidad.

Por eso, acompañamos lo dicho por el senador Godoy.

Sr. Presidente (Pinedo).- Si le parece bien al cuerpo, haremos un minuto de silencio en homenaje a la memoria del señor diputado Daniel Tomas.

- *Puestos de pie los presentes, se guarda un minuto de silencio.*

También agradezco desde nuestra lengua materna, la lengua mbya guaraní de la región de Andresito, una vez más la inclusión de los derechos a partir del reconocimiento de nuestra identidad y de nuestra cultural general.

Agradezco a la Comisión de Educación, a todos sus integrantes, por la premura con la que le dieron tratamiento y por el compromiso de respetar las propias culturas de todo nuestro país que hacen a la esencia de nuestra identidad nacional y que son parte de nuestro legado histórico.

Sr. Presidente (Pinedo).- Se van a votar en conjunto los órdenes del día mencionados.

Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso.- Como es un tratamiento en conjunto, ¿por qué no se vota la autorización para realizar inserciones.

Sr. Presidente (Pinedo).- Cómo no.

Se va a votar el pedido de inserciones.

- *Se practica la votación a mano alzada.*

Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.¹¹

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 63 votos; negativos, cero votos, y abstenciones, cero.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*¹²

Sr. Presidente (Pinedo).- Se comunica a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo nacional, según corresponda.¹³

18. Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados (O.D. N° 951/16.)
--

Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde proponer en consideración de los órdenes del día con proyectos de ley que a continuación por Secretaría se enunciarán para ser tratados y votados en forma individual.

Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día N° 951/16. Dictamen de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales aceptando las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera enviado en revisión por el que se crea un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados. (P.E.-61/16.)

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Espínola.

Sr. Espínola.- Señor presidente: se trata de un proyecto de ley que ya hemos debatido en este Senado. Se ha hecho un gran trabajo entre todos los sectores. Se buscó claramente aportar todo lo relativo a transparencia, fomento del trabajo nacional, para empresas locales y cuidado del medio ambiente.

Luego del gran trabajo que se hizo en el Senado, los aportes que se hicieron en la Cámara de Diputados complementan de manera saludable esta visión que hemos llevado adelante cuando tratamos y debatimos el proyecto.

Por eso hemos dictaminado en la comisión que se apruebe el texto tal cual fue aprobado en la Cámara de Diputados. Espero que la ley tenga, justamente, esa herramienta fundamental que permita a través de la inversión pública privada generar

¹¹ Ver el Apéndice.

¹² Ver el Apéndice

¹³ Ver el Apéndice.

obras de infraestructura, reactivar la economía, pero fundamentalmente que tenga una visión federal que hace falta en el país.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Martínez.

Sr. Martínez (A. A.).- Como bien lo decía el senador Espínola, presidente de la Comisión cabecera –a nosotros también nos tocó trabajar en la iniciativa–, fueron muy importantes las modificaciones que hicimos en el Senado al proyecto originario que vino del Poder Ejecutivo. También es cierto que esto fue enriquecido en la Cámara de Diputados y que se avanza. Incluso, recuerdo más de treinta modificaciones que se habían hecho acá. Ahora, son más de treinta las que se hicieron en la Cámara de Diputados.

Creo que es saludable y un muy buen ejemplo de cómo debemos tratar cada proyecto de ley para ir mejorándolos y no tener que avanzar sobre una idea prefijada.

Recuerdo, en su momento, algunas cosas que decía la senadora Negre de Alonso y que, luego, fueron incorporadas en la Cámara de Diputados. Nos alegramos, senadora, de que esto haya ocurrido.

- La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Martínez (A. A.).- Sí, cómo que no va a existir, senadora.

Y lo otro es el avance que se ha ido dando en cuanto a los mecanismos de control, con la participación de la AGN, con la participación del Tesoro en aquellas cuestiones vinculadas con las cesiones.

Realmente, ha sido un proceso del cual debemos estar todos absolutamente satisfechos, sabiendo que es una herramienta más que va a tener el gobierno para poder avanzar, además de la ley de obra pública y de la ley de concesiones.

Creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros y que, por supuesto, tiene el Poder Ejecutivo es generar empleo en una etapa como la que estamos viviendo. En ese sentido, y con ese objeto, hoy acompañamos la sanción de esta modificación para que quede transformado en ley.

Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Elías de Perez, tiene la palabra.

Sra. Elías de Perez.- Señor presidente: la verdad es que lo que quiero es rescatar el trabajo hecho por el Senado.

Estoy convencida de que, a pesar de que estamos aceptando las modificaciones que vienen de Diputados –son más de maquillaje que otra cosa–, el trabajo que han hecho las comisiones correspondientes del Senado de la Nación fue espectacular. Y reconozco que los senadores Espínola y Martínez han trabajado con absoluta responsabilidad, por lo que la norma que hemos sancionado acá fue excelente. Las propuestas de la Cámara de Diputados ya estaban: ponen el tema del “compre argentino”, pero no hacía falta porque es una ley de la Nación y era obvio que se iba a cumplir con el “compre argentino”. Bueno, ahora figura explícitamente.

El tema del medioambiente figuraba. Bueno, ahora lo han puesto de una manera, quizá, más fuerte. El tema de los controles también figuraba. Ahora, se pone una bicameral; está bien, aceptamos. Pero lo que quiero rescatar es el trabajo bien hecho y absolutamente a conciencia por nuestra Cámara, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Labado, tiene la palabra.

Sra. Labado.- Gracias, presidente.

Bueno, se hubieran ahorrado que este proyecto volviera para acá si hubiesen tenido en cuenta las modificaciones propuestas en su momento y que, justamente, han sido incorporadas por la Cámara de Diputados.

Creo que generar un órgano de contralor no es maquillaje; hace a la ley, al control que debe tener esta norma específica, sobre todo, cuando hablamos de organismos que son extranjeros, de empresas extranjeras que van venir a trabajar a nuestro país y que no van a respetar los convenios colectivos de trabajo, porque esto no fue incluido en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que no hay un maquillaje en la ley. Se han hecho reformas que nosotros también habíamos planteado en este recinto, al igual que lo hicieron otros senadores. El porcentaje para la industria argentina, para nuestras pymes –que era también un pedido de algunos senadores–, hoy lo ha incorporado la Cámara de Diputados.

Como no se ha incorporado ni tenido en cuenta –tampoco en la Cámara de Diputados– esto que acabo de decir de los convenios colectivos de trabajo, debo manifestar que, en concordancia con la sanción que ya hizo este Senado de la Nación, voy a mantener el voto negativo para este proyecto.

Sr. Presidente (Pinedo).– Gracias, señora senadora.

Senadora Negre, tiene la palabra.

Sra. Negre de Alonso.– Gracias, presidente.

La verdad es que me acuerdo del día de la discusión. Y si bien voté en contra, propuse modificaciones concretas a las que se me contestaba que “no”, “no”, “no”, a veces, con un simple movimiento de cabeza. Bueno, parece que tan errada no estaba o que, por lo menos, el tiempo que uno dedica a estudiar los proyectos no es en vano, porque la Cámara de Diputados hizo lo que podríamos haber hecho nosotros.

No creo que sea inocua la modificación de la Cámara de Diputados. Creo que es importante, por eso la diferencia que hoy haremos en la votación. Por ejemplo, nosotros hablamos acerca de lo que pasaría cuando estuviera involucrada la prestación de servicios públicos, que había que respetar los marcos regulatorios. La Cámara lo incorporó.

Hablamos de los lazos, presidente, respecto de lo cual me contestaron que no era posible cuando planteé ese tema. Sin embargo, esto ha sido incorporado por la Cámara de Diputados cuando dice que deberán tenerse en cuenta las inversiones contractualmente comprometidas, no las inversiones como estaba originariamente, es decir, las efectivamente realizadas.

Bueno, después, por supuesto, el valor agregado nacional a lo que se estaba realizando. La preservación del medioambiente está profundizada y también las externalidades positivas. Y, después, en la documentación contractual, deberán especificarse las obligaciones que, a los fines indicados, se deben tener en este tipo de contratos. Además, todo lo que se debe especificar, porque se incorpora un organismo técnico que no es menor, que hace todo el análisis antes de que el gobierno llame a licitación y que tiene la obligación de publicarlo por treinta días y, entonces, en esos treinta días podrá haber impugnaciones o no –no está contemplado acá, pero no es óbice– y, además, sabrá cuáles son las reglas de juego de quien se incorpore a este sistema de PPP, a este sistema de licitaciones.

Bueno, incorpora la posibilidad de los fideicomisos. La cesión, que era otro de los temas; qué pasaba si se adjudicaba y había cesión del contrato, en qué condiciones se cedía. Dice que debe tener un dictamen fundado del órgano que controla la ejecución del contrato. O sea, hay todo un agregado respecto de la cesión.

En total, señor presidente, hay veintiocho modificaciones –si mal no recuerdo– que le hace la Cámara de Diputados al proyecto al que el Senado le dio sanción. Y estas modificaciones, como dijo la senadora Labado, tienen mucho que ver con lo que nosotros planteamos acá.

Entonces, quiero que nos llamemos a la reflexión. No es cuestión de decir “sí” o “no”. Si uno de nosotros está proponiendo incorporaciones que son para mejorar la legislación, no necesitamos que vaya a Diputados y que nos enseñen lo que se debe hacer. Acá esto lo planteamos en el recinto. No soy miembro de la comisión, pero lo planteé, lo advertí; salvo dos cuestiones que la senadora Elías de Perez apoyó para aceptarlas, todo el resto fue rechazado y hoy está incorporado acá. Y lo digo porque el presidente de la bancada del Frente para la Victoria me cabeceaba y me decía “no”, “no”, “no”. ¡Lógico!, ellos tienen la mayoría.

Sr. Pichetto.- Pido la palabra. Fui aludido.

Sra. Negre de Alonso.- Pero, ¿sabe qué, presidente? Por ahí vale la pena escuchar. Vale la pena escuchar al otro que, por ahí, en algunas cosas tiene razón.

Menos el capítulo VII, nosotros sí vamos a acompañar porque creemos que este proyecto ahora sí tiene las garantías suficientes para el Estado argentino y para todos los argentinos en todo este tipo de contratos PPP, que tan famosos se han hecho últimamente en los medios de comunicación.

Creemos que el Estado tiene garantías, que no habrá cesiones, que no habrá abusos. Además, hay órganos de control y se incorporó al Congreso de la Nación. Así que, por eso, presidente, vamos a votar a favor, menos el capítulo VII.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.

Por haber sido aludido, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto.- En realidad, yo siempre tengo una mirada positiva de la tarea que hace el Senado y no acostumbro a deslegitimar o desvalorizar esta tarea.

Yo quiero rescatar lo que hizo el Senado nacional. Se trataba de un proyecto que no tenía ningún control. Incorporamos a la Auditoría General de la Nación, primer dato central de este abordaje.

El proyecto venía sin controles sobre la base de un antecedente anterior. Sin controles. La Auditoría General de la Nación estará para hacer todos los controles de todos los proyectos de PPP.

Se habló de que no respetábamos las normas de trabajo. Quiero decirles que pusimos una cláusula expresa que sostenía la defensa de las normas laborales y de seguridad social. ¿No es así, senador Lovera?

Sr. Lovera.- Así es.

Sr. Pichetto.- Bien.

Se habló de que no defendíamos a las empresas pymes ni a las empresas nacionales. Hicimos una remisión directa a que las subcontrataciones se tenían que hacer con empresas pymes y con empresas provinciales de infraestructura.

Me parece que había un conjunto de acciones que, bueno, fueron mejoradas. Bienvenidas, las incorporamos y me parece importante, pero tampoco es para hacerse la autoinmolación por una mala tarea. Me parece que la ley salió bien. Era un buen proyecto, tenía controles, no se podía hacer cualquier cosa y garantizaba un conjunto de reglas para el sistema de contratación público-privado y el nivel de inversiones. Y, fundamentalmente, no podía venir –para ponerle nombre y apellido– empleo precarizado ni trabajadores de la construcción de otras nacionalidades y tenían que cumplir con las normas laborales. Era un proyecto que tuvo un trabajo importante en el marco del Senado y que ha sido mejorado en el proceso de sanción de las leyes por la otra Cámara.

Dicho esto, yo defiendo la tarea que hicimos. Bienvenidas las reformas. Creo que es una buena ley. Esperemos que le sirva al país y que vengan inversiones para infraestructura, para ferrocarriles, para rutas y caminos, autovías, y que se puedan hacer

estas inversiones de manera transparente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Lovera.

Sr. Lovera.- Señor presidente: yo, aparte de adherir en todos los términos a las expresiones vertidas por el senador Pichetto y de felicitar el trabajo que se ha hecho en todo esto, había pedido la palabra simplemente para solicitar permiso para hacer una inserción en este tema, ya que ha sido largamente debatido.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes.- Por razones de brevedad, me voy a remitir a los fundamentos que brindé con motivo de mi voto negativo en oportunidad de la discusión de la media sanción de esta ley en el Senado. Es decir, como no tengo la mirada benevolente del resto de los senadores en torno a la intencionalidad y capacidad de obrar que este gobierno tiene en detrimento de los intereses legítimos nacionales, simplemente, ratifico mi voto negativo con respecto al proyecto, a pesar de las correcciones y de las buenas intenciones.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero.- Señor presidente: si bien es cierto que a esta altura no podemos efectuar modificaciones, quiero señalar –por lo menos, para que conste en la versión taquigráfica– dos o tres observaciones.

Con respecto a mi opinión general de este proyecto, ya la brindé la vez pasada, cuando, si bien voté a favor, expresé el riesgo de tercerizar en los particulares el diseño de las políticas del Estado, pero, suponiendo que exista un buen control, será el Estado el que fijará la estrategia y no los privados.

Aquí quiero señalar tres cositas. El proyecto modificado prevé que la administración tendrá que hacer rondas de consultas previas a la licitación...

- *Murmullos en el recinto.*

Sr. Pichetto.- Perdón.

Sr. Romero.- Gracias.

Decía que se prevé que habrá consultas previas a las ofertas y que se consultará a los interesados preclasificados. Esto no puede ser, porque si está preclasificado es después de iniciado el proceso. En todo caso, debería decir solamente “a los interesados”, porque es previo al proceso. Se va a saber quién está preclasificado después de la apertura de lo que usualmente se conoce como sobre A. Esa palabra está equivocada allí.

Después, el artículo 23 habla de las incompatibilidades y el inciso *e*) establece que es incompatible aquel al que se le hubiera decretado una resolución por incumplimiento de su parte con un contrato celebrado con el Estado nacional en general o con la contratante en particular. Creo que desde el punto de vista legal no alcanza con que hubiera habido un decreto; si ese decreto ha sido impugnado o ha sido recurrido o está en la justicia, esa resolución no tiene valor hasta que no esté firme. Entonces, sería anticonstitucional dejar afuera a alguien por el solo hecho de que haya tenido un decreto en contra; le faltaría una parte que diga que esté terminado o concluido el proceso.

El inciso *g*) aclara que tampoco pueden contratar con el Estado quienes tengan deudas con la AFIP determinadas mediante actos administrativos, y falta que sean firmes y consentidos para seguir nuestro sistema legal y jurisprudencia, porque la AFIP puede determinar lo que quiera, pero generalmente ese acto es válido cuando está firme y consentido, ya sea porque se ha expedido el tribunal fiscal o la justicia o que la persona que hizo la determinación lo haya consentido.

Por último, el inciso *h*) declara incompatible a los procesados por autos firmes. Y creo que la Constitución siempre habla de condenados, es decir, con sentencia firme, no procesados o imputados. Creo que esta es otra exageración y que en estos tres casos,

tanto el de la AFIP como el de los procesados y el de quienes tuvieron un decreto, sería inconstitucional excluirlos. Pero como nos toca a nosotros resolver esto, solamente quería dejar asentadas estas observaciones.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Solanas.

Sr. Solanas.- Señor presidente: por supuesto que voy a reiterar todo lo dicho en mi intervención cuando se trató esta misma ley en este recinto.

Es cierto que ha venido con algún maquillaje, con algunas medidas más interesantes, pero no cambian el sentido profundo que tiene esta ley.

Yo creo que esta ley es la ley de la derrota política. Es una ley de la derrota nacional. Acá estamos de nuevo ratificando el Estado rebobo, aquel que se endeuda y se queda sin defensas ni beneficios, solo con daños y con deudas.

Es una ley típica de un país que ha venido profundizando el modelo de neocolonización, de extractivismo económico y de cesión de su soberanía –y hasta del derecho de defensa– en tribunales extranjeros.

La verdad es que a esta altura del maltrato con la Argentina no podemos pensar que hay que seguir terminando en el CIADI, cuyas resoluciones del comité de esta sección –Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial– son definitivas, obligatorias e inapelables. ¿Qué le queda a este país? ¡Sinceramente!

Acá, el Estado se endeuda, toma ese cargo, pero, como es buenísimo, le asegura a aquel que le ha derivado el crédito una rentabilidad “razonable” –entre comillas– y sin especificarla por 35 años.

Señores senadores: no voy a ser la nómina de todas las veces que mecanismos semejantes endeudaron a la Argentina. Grandes obras argentinas se hicieron con capital nacional porque había vocación y decisión de colocar el ahorro nacional en la construcción de soberanía.

Yo fui testigo de cómo se hicieron algunas de esas obras. Recordemos otras del pasado. Recordemos cuando el ingeniero Canessa le dijo a Perón, en el año 1946, cuando se creó Gas del Estado y lo nombraron presidente de Gas del Estado: “Yo le traigo el gas a Buenos Aires”. ¿Cómo?! ¿Con qué dinero? ¿Con qué tecnología?. “Yo le aseguro que se lo traigo”. No se pidió un dólar prestado; es más, no se hizo en 20 años ni en 15 ni en 5, se hizo en 19 meses el gasoducto más largo del mundo.

Recordemos cuando el general Mosconi le dijo a Yrigoyen: “Acá no podemos no tener una gran destilería”. ¡No! ¿Pero cómo vamos a construir nosotros una destilería? ¿Con qué dinero? Toda la prensa decía que iban a dilapidar en industrias de punta que no conocemos; somos expertos en granos y en vacas. Sin embargo, en dos años se levantó la destilería de La Plata, la más importante de América Latina en su tiempo, sin pedir un dólar prestado.

Una anécdota, para darnos cuenta del grado de conciencia nacional que tenía aquella burguesía dirigente. Cuando el Banco Nación tenía que librarle los créditos le dijo: “No podemos. Ustedes nos tienen que dar avales”. “¿Pero, cómo avales, si soy una empresa del Estado?!”, dijo Mosconi. ¿Saben cómo se resolvió? Todos los miembros del directorio, entre quienes había algunos grandes propietarios –como era el caso del doctor Carlos Madariaga, que tenía grandes extensiones de tierra en Corrientes–, pusieron sus bienes y sus propiedades como aval de los créditos del Banco Nación.

¿En cuántos años se construyó la mayor destilería del continente? ¡En dos años, estimados senadores! ¡Había decisión nacional! ¡Había vocación nacional! ¡Y hacían nacer la primera industria hidrocarburiífera estatal de occidente! ¡Sí, YPF fue la primera empresa petrolera estatal de occidente!

Entonces, que me disculpen quienes han impulsado esta ley, pero esta ley es algo que realmente a mí me subleva, les digo la verdad. Yo he tratado a muchos de estos grandes argentinos y veo que esta ley es la derrota.

Tampoco se puede hablar acá de que tenemos la protección de la AGN. Ese es un embuste que no se puede permitir, porque yo no conozco hasta ahora que la AGN haga seguimiento de los procesos. La AGN actúa después de la construcción y después del hecho.

En cuanto a este asunto de la comisión bicameral de seguimiento, quisiera que alguno me cuente cuáles fueron los resultados de las comisiones de seguimiento de todas las privatizaciones y de las fechorías que se hicieron en estos 20 años.

Señor presidente: no voy a entrar en detalles porque tardaríamos mucho en analizar esto. Invito a los señores senadores a colocar el botón de la conciencia. Esta ley es antinacional, es una ley más de coloniaje y de abuso.

Y, otra cosa: ¿alguno tiene la cara para mirar a las dos generaciones que se van a hacer cargo de este pasivo? Cuando se entregan los recursos petroleros como se entregaron o cuando se endeuda al país por 35 años... Hay que gobernar pensando en nuestros hijos, nietos y bisnietos. Hay que utilizar los recursos naturales, como lo dice la Constitución Nacional, pensando en las generaciones que vienen.

Por eso, señor presidente, votaré con las dos manos, con el corazón y con el estómago contra esta ley.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pais.

Sr. Pais.- Si bien no integro las comisiones que trataron específicamente este proyecto, yo encuentro algunas inconsistencias en lo aportado o modificado por la Honorable Cámara de Diputados y quiero dejar constancia de ellas en el desarrollo de este debate, y después voy a pedir la abstención o el voto por la negativa en algunos de los artículos en particular.

En principio, quiero dejar claro que en el agregado del artículo 1º, en donde dice que los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener un objeto, una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamiento y bienes, explotación u operaciones financieras, se eliminó la descripción de los servicios conexos. En principio, estos servicios conexos, al estar excluidos, van a implicar un tratamiento diferente de la obra principal. Ello va a traer directamente dificultades, porque al estar excluidos deberán ser enmarcados en el régimen de contrataciones del Estado.

El otro problema de inconsistencia que noto está dado en el artículo 2º, porque luego de excluirse para estos contratos las normas clásicas de contrataciones, dice que, en los casos en que los contratos de participación pública privada involucren la prestación de servicios públicos regidos por los marcos regulatorios específicos, dichos marcos regulatorios resultarán de aplicación a la prestación de tales servicios.

Vea, presidente: en ningún artículo de la norma que sancionó el Senado se excluían los marcos regulatorios de servicios públicos. Aparece una norma sobreabundante –si se quiere– para ratificar un principio general, pero en modo alguno viene a subsanar un defecto del proyecto que fue en revisión, del proyecto original del Senado. Entonces, yo diría que es una reafirmación, pero en modo alguno rectifica un error de esta Cámara de Senadores.

En cuanto al artículo 4º, hay una norma que aparece loable, pero muy descriptiva, que es el inciso k). Observe, señor presidente, que el encabezamiento de ese artículo 4º dice: “En la oportunidad de estructurarse proyectos de participación pública privada, y teniendo en consideración las circunstancias y características de cada

proyecto, la contratante deberá –y acá se le pone– promover el desarrollo de aquellos proyectos que coadyuven a la preservación del medioambiente y a la sustentabilidad económico, social y ambiental del área donde estos se ejecutarán, todo ello de conformidad con la legislación y los acuerdos internacionales vigentes en la materia”.

Realmente, esto no es una manda para el contratante; acá hubo un error claro en la ubicación de esta norma en el artículo 4º y, en el mejor de los casos, debió estar ubicada en el artículo 1º o en el artículo 2º, nunca en el 4º, porque esta no es una obligación del contratante, sino que es una obligación del sistema, que están incorporando los señores diputados.

También quería acotar que existen absolutas dificultades en el agregado del artículo 5º que se formuló en la Cámara de Diputados. En donde dice: “En la documentación contractual deberán especificarse las obligaciones que, a los fines antes indicados, deberán recaer sobre cada una de las partes del contrato de participación pública privada y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de todas las obligaciones que la legislación aplicable pudiere imponerle en la materia. A estos fines, previo a la aprobación de documentación contractual, deberá tomar intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”. Debió decir: “Cumplir las leyes de presupuestos mínimos y la ley general del ambiente”, y la intervención específica también incluirá la autoridad ambiental provincial, que –como ya emerge de la clara jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación– tiene la competencia complementaria, e incluso superadora, de la legislación nacional. Ese es el fallo “Villivar” de la Corte Suprema de Justicia del año 2007.

También, para acotar algunas diferencias, quiero aclarar que en los últimos artículos de este proyecto, cuando se incorporan las normas del Código Penal, el artículo 23, inciso *h*), debió decir especialmente –porque hay un defecto grave– que se trata del libro II de dicho Código Penal, porque reitera capítulos que están en el libro I o II. Son libros diferentes. El inciso *h*) del artículo 23 menciona los procesados por autos firmes y los condenados por alguno de los delitos previstos en los títulos 11, 12 y 13 del Código Penal de la Nación, obviamente del libro II.

Por lo menos, espero que estas deficiencias queden asentadas en el Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores y que, de sancionarse esta ley, puedan ser rectificadas y aclaradas en el ámbito específico y a través del reglamento que se dicte al efecto.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo).–Queda constancia el sentido del voto del señor senador.

Senador Cobos: tiene la palabra.

Sr. Cobos.– Seré muy breve, señor presidente.

Creo que en un país donde están haciendo falta obras de caminos –como bien se dijo aquí–, obras de energía –tenemos un déficit energético muy grande– y obras en materia habitacional, todo lo que pueda surgir de la creatividad y con toda la seguridad necesaria para que se pueda avanzar en la generación de instrumentos a efectos de que las distintas administraciones puedan satisfacer las necesidades que hoy tiene la ciudadanía, es bienvenido.

En este sentido, se ha discutido mucho este tema. Lo dijo el senador Martínez. El Senado introdujo treinta y seis modificaciones sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Ha hecho lo propio con otras tantas, que han sido de fondo en algunos casos y en otros no tanto. Quizás algunas han sido reiterativas, pero bienvenido si esto puede lograr un mayor consenso. Es una ley que necesita consenso por cuanto se trata de una flexibilización o adecuación de dos normas muy importantes que rigieron en materia de

obra pública en el país: la ley de concesión de servicio público y la ley de obras públicas.

Ahora bien, sin perjuicio de todas las cosas que podamos poner, el tema siempre estará en la buena fe de aquel al que le toca administrar. Voy a mencionar un ejemplo claro que tuvimos en la provincia de Mendoza. Se trata de una obra que inició un gobierno justicialista, con el doctor Lafalla. Había una presa que era anhelo del primer gobierno democrático; me refiero al doctor Felipe Llaver, radical. Hubo una ley específica de participación pública privada. Básicamente, esa obra generó la energía del 25 por ciento del consumo de la provincia. Fue la presa y central Potrerillos. A grandes rasgos, la asociatividad pasó por el hecho de que el estado provincial asumiera la construcción de la presa; por su parte, la central –la inversión y el financiamiento– corrió por cuenta de la empresa oferente. Se realizó con total normalidad, con algunas discusiones, pero siempre sobre la base de la buena fe y de las ofertas claras que deben, de alguna manera, preceder a todo proceso licitatorio.

Así que, dicho esto, la Unión Cívica Radical y el interbloque Cambiemos va a acompañar todas las modificaciones, de manera tal de poder generar y contar con un instrumento que permitirá el avance en materia de obra pública que hoy necesitamos en nuestro país.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.

Corresponde votar la posibilidad de efectuar inserciones. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.¹⁴

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar autorizar las abstenciones para aquellos que lo han solicitado.

- Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.

- El señor senador Pais realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Pinedo).- Va a quedar constancia de la posición del señor senador Pais.

Sr. Pereyra.- Señor presidente: tenía la palabra pedida.

Sr. Presidente (Pinedo).- ¡Ah, no lo habíamos anotado! Disculpe, senador.

Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

Sr. Pereyra.- Solamente quiero decir que acompañó este proyecto de ley y las modificaciones efectuadas en la Cámara de Diputados.

Pido permiso para realizar una inserción.

Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias, senador.

Se a votar en una sola votación. Los que voten por la afirmativa, querrá decir que aprueban el dictamen de comisión que propone aceptar las modificaciones de la Cámara de Diputados.

Sra. Crexell.- Solicito que conste mi abstención.

Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia de la abstención de la senadora Crexell.

Sr. Secretario (Tunessi).- La abstención que se ha autorizado es la del senador Pais y ahora habría que aprobar la abstención de la senadora Crexell...

Sr. Presidente (Pinedo).- No, están autorizadas las abstenciones en general.

Sr. Secretario (Tunessi).- Perfecto.

Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar.

¹⁴ Ver el Apéndice.

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 43 votos; negativos, 15 votos; y abstenciones, 2.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*¹⁵

Sr. Presidente (Pinedo).- Queda sancionada la ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.¹⁶

19. Desarrollo de la marina mercante nacional e integración fluvial regional (O.D. N° 822/16.) Creación del régimen de incentivos, promoción y desarrollo de la industria naval (O.D. N° 823/16.)

Sr. Presidente (Pinedo).- En consideración –sugiero que sea en forma conjunta– las órdenes del día 822 y 823.

Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día 822 y 823: la primera es el dictamen de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio en el proyecto de ley del señor senador Solanas y otros referido al desarrollo de la marina mercante nacional y a la integración fluvial regional; y el otro – 823– es el dictamen en el proyecto del senador Luenzo, por el que se crea el régimen de incentivos, promoción y desarrollo de la industria naval y de la marina mercante nacional.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Espínola.

Sr. Espínola.- Gracias, señor presidente.

Primero, quiero hacer una breve reseña de cómo se fue desarrollando el proyecto de ley.

Como sabrán, nuestro país en algún momento ocupaba el quinto lugar en todo lo que era la flota fluvial, pero actualmente la Argentina tiene el uno por ciento de lo que es el tráfico en la hidrovía Paraná-Paraguay, lo cual demuestra cómo hemos perdido este sistema de transporte tan importante para cualquier país.

Como presidente de la comisión, quiero agradecer fundamentalmente a todos los que han trabajado para que este proyecto de ley hoy se pueda tratar. Recuerdo la primera reunión que tuvimos con el jefe del bloque, don Miguel Pichetto, de la cual participó también Pino Solanas. Estuvieron diferentes sectores sindicales que pudieron plantear las necesidades que tenían y cuáles eran los argumentos por los cuales no se pudo definir con tiempo anterior una ley tan importante para la logística y la conectividad de nuestro país.

- *Murmullos en el recinto.*

Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, yo voy a pedir silencio, señora senadora.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Espínola.

Sr. Espínola.- Gracias, senadora. Gracias, presidente.

De hecho, quiero decir que nuestro país, por diferentes motivos, ha ido perdiendo esta flota tan importante.

En 2004, nuestro expresidente Néstor Kirchner, a través del decreto 1.010, buscó la recuperación o el incentivo de lo que era la flota, tanto de la marina mercante como de la industria naval. La idea era que en dos años se pudiera consensuar y encontrar una ley. Por diferentes motivos, el sector no ha podido consensuar una norma.

Debido a estas reuniones, y con los proyectos de Pino Solanas y del senador Luenzo, se ha trabajado en el consenso de todas las partes. También se incorporó el

¹⁵ Ver el Apéndice.

¹⁶ Ver el Apéndice.

INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación son las siguientes:

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEREYRA

Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados (O.D. N° 951/16.)

Señor presidente:

Quiero describir, desde mi punto de vista, varias cuestiones relacionadas con tres temas de este proyecto de PPP: participación de pymes en estos contratos, participación de trabajo nacional y presupuesto nacional para estos proyectos.

En relación al artículo 4º, obliga a que estos contratos contengan, entre otras cuestiones, enunciado del incentivo para nuevos puestos y fuentes de trabajo, estableciendo planes y programas de capacitación para los trabajadores, como también el fomento de la participación de pymes, además facilitar el desarrollo del mercado de capitales local.

Esto es un simple anuncio de protección con improbables métodos de garantías para que esto suceda.

También en el artículo 12, que refiere a los métodos de selección de las contratistas, dice que estos procedimientos de contratación deberán promover, de acuerdo a las características del proyecto, la participación directa o indirecta de las pymes y el fomento de la industria y del trabajo nacional. Además, para la provisión de bienes y servicios los pliegos y demás documentación contractual deberán contener previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan como mínimo un 33 % de componente nacional, y aclara que el Poder Ejecutivo nacional, en casos particulares, podrá exceptuar o limitar lo mencionado en el párrafo anterior para estas contrataciones.

La elección del origen de la empresa, como de los bienes y servicios nacionales es arbitraria porque queda librado al sentido común de quién lo decida. Decisiones que serán de carácter relativo y arbitrario.

Por otro lado, se vuelve simplemente a enunciar el fomento a la participación de pymes, y el piso del 33 % de participación de componente nacional también es cuestionable porque se podría tomar, por ejemplo, un piso del 40 % de componentes nacionales, como lo legislado para la consideración de producto nacional en automóviles.

El artículo 13 dice que la autoridad convocante deberá emitir un dictamen, antes del llamado a licitación, de varios aspectos relacionados con el proyecto a desarrollar. En relación al trabajo nacional, aclara que debe dictaminar sobre el impacto que provocará el proyecto en la generación de empleo y en el fomento de las pymes y de la industria nacional, indicando la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que se estima que serán generados por el proyecto, así como el porcentaje de la participación de la industria nacional en general y de las pymes en especial.

Se continua enunciando o “prometiendo” el fomento de servicios con trabajo nacional.

También el artículo 15 detalla que la adjudicación será la más conveniente para el interés público, y que los pliegos licitatorios deberán promover en sus pautas de selección del adjudicatario criterios que determinan ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre las consideradas pymes. Salvo que la unidad de PPP que se crea mediante este proyecto de ley y por medio de informe fundado justifique la conveniencia o necesidad de su exclusión.

Si bien, la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de PPP podrá requerir a la unidad de PPP o a la autoridad contratante que informen sobre el cumplimiento de las exigencias contenidas en los párrafos anteriores, así como también de tecnología a favor de la industria nacional a la contratación de recursos y talentos humanos de nuestro país. Estas cuestiones, para cuando llegue a conocimiento de la bicameral, es relativo que su acción pueda torcer las decisiones ya encaminadas.

El artículo 16 dice que en caso de que el contrato de PPP comprometa recursos del presupuesto público, previo a la convocatoria a concurso o licitación, deberá contarse con la autorización para comprometer ejercicios futuros, la que podrá ser otorgada en la respectiva ley de presupuesto general o en una ley especial, siempre y cuando el resto acumulado por los compromisos firmes y contingentes cuantificables netos de ingresos asumidos para el sector público no financiero en los contratos de

participación público privada calculados a valor presente no exceda el 7 % del producto bruto interno a precios corrientes del año anterior.

Es un exagerado techo o límite para las contingencias. Es importante aclarar que el producto bruto interno ronda los 10 billones de pesos.

El artículo 32 dice que para el ejercicio 2017 se establece un tope del 5 % del presupuesto general de la Nación para utilizar para proyectos de PPP, debiendo para los años subsiguientes indicar con precisión en el proyecto de presupuesto las partidas presupuestarias destinadas a estos proyectos.

Este 5% *a priori* parece exagerado y debería especificarse sobre qué se considera: ¿sobre gastos, sobre recursos? Y esa previsión anticipada, ¿cómo la va a distribuir el jefe de Gabinete de Ministros?

2

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU

Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados (O.D. N° 951/16.)

Señor presidente:

Volvemos a traer a la mesa una de las iniciativas que el Ejecutivo ha pretendido sacar sin hacer demasiado ruido. Sin embargo, y a pesar de las modificaciones incorporadas, el espíritu de esta reforma no ha cambiado.

Pongamos la verdad sobre la mesa: este proyecto responde a una visión neoliberal que incluye endeudamiento y privatización.

La obra pública ha sido históricamente para todos los países la motorización del desarrollo nacional porque involucra a la industria y a la mano de obra local, con claros objetivos de potenciamiento económico y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.

Ahora bien, la propuesta que nos trae el gobierno nacional quiere saltar los formalismos existentes abriendo una puerta para que el poder de turno determine a quién tercerizar el desarrollo del país o, lo que es más evidente, con quién hipotecar los intereses de los argentinos.

Tenemos muy claro el criterio adoptado y dónde apunta el proyecto de extranjerización que han iniciado. No es casual que todos los proyectos provenientes del Poder Ejecutivo que ingresan se orienten a intereses foráneos.

Estamos facilitando la venta de nuestros recursos más preciados. Y permitir este tipo de herramientas es dar marcha atrás en la protección de la soberanía que tanto nos ha costado sostener.

La decisión y contratación de la obra pública en el país es una facultad que no puede delegarse, mucho menos admitir la prórroga de jurisdicción como propone esta iniciativa.

No es en vano la experiencia que nos dejaron los fondos buitres, en que ninguna de las promesas ni vaticinios hechos por el gobierno fueron cumplidos, y, en cambio, perdimos la jurisdicción en una causa que determinaba el rumbo económico de nuestro país.

Señor presidente: este proyecto agudiza y profundiza aún más las políticas de desregulación que vienen aprobándose, además de allanar el camino a determinadas empresas proveedoras de servicios públicos. Todo esto, sin el debido cumplimiento de los recaudos que hasta el día de hoy garantizaban la protección de los intereses nacionales.

Estamos ante un arma de doble filo que no puede aprobarse solapadamente como se pretende. La ciudadanía tiene el derecho a conocer los verdaderos intereses que hay detrás de este proyecto, porque está poniendo en jaque nada menos que nuestra soberanía.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA

Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados (O.D. N° 951/16.)

Señor presidente:

En los tiempos que estamos viviendo está claro que el sector público y el sector privado no pueden estar totalmente aislados, sino que es necesaria su interrelación y su asociación, que puede ser múltiple y variada.

Ya es sabido, como se ha dicho, que hay cosas que las empresas privadas hacen mejor que el gobierno, pero hay cosas que el gobierno hace mejor que las empresas privadas. El sector público tiende a ser mejor, por ejemplo, en la gestión política, la regulación, la garantía de estabilidad y continuidad de los servicios y la garantía de cohesión social. Las empresas privadas tienden a ser mejores en el cumplimiento de tareas económicas, en la innovación, en la repetición de experimentos exitosos, en la adaptación a cambios rápidos, en el abandono de empresas infructuosas u obsoletas.

Muchos son los países que tienen una ley de contratación público-privada, siendo Inglaterra uno de los que más la aplica, y en Sudamérica también muchos países la tienen y utilizan, como Chile y Uruguay, entre otros.

A mi entender, este proyecto de ley es positivo en el sentido de que el Estado contrata a una empresa privada para que realice la obra, asumiendo los costos y corriendo con los riesgos, a los fines de que luego sea entregada al Estado para que la adquiera, es decir, la empresa correrá con los costos y riesgos iniciales de la obra y empezará a cobrarla cuando sea entregada al Estado –momento en el cual comienza el riesgo del Estado–. Por ejemplo, si la obra es de peaje, la empresa percibirá lo percibirá hasta tanto la deuda del Estado con ella quede saldada, es decir, lo va a administrar percibiendo las ganancias.

Considero que esta modalidad suma en la medida en que entendamos que debe haber una complementariedad entre lo público y lo privado que conlleve a elaborar una política pública, y que ello signifique desarrollo social y crecimiento económico, poniendo énfasis en los beneficios por conseguir.

Una empresa privada, como todos sabemos, señor presidente, tiene una forma de trabajo distinta a la del Estado. Establece más controles y tiene el capital que al Estado le resulta difícil conseguir para obras de gran envergadura que deben realizarse en diferentes ámbitos. Adquieren innovaciones y tecnología que al Estado le resulta difícil obtener y que hacen que el trabajo pueda ser más eficiente, en menor tiempo y con menores costos, aprovechando más eficientemente los recursos.

Creo que se deberá, en principio, prestar atención en cuanto a si el régimen de contratación público-privada es el más adecuado para el contrato que se quiere realizar; prestar especial atención a los pliegos, ya que lo que no se establezca allí luego no se podrá reclamar y, en la práctica, que los organismos de control realmente ejerzan esa función y que este nuevo capítulo introducido por Diputados, sobre la creación de la comisión bicameral para el seguimiento de los contratos de contratación público-privada, también se aplique.

Hay países, por ejemplo Inglaterra, que tienen un listado de obras en las que conviene usar esta modalidad y un listado en las que no –como, por ejemplo, en las de corto plazo–.

Habiendo analizado el proyecto original y las modificaciones de Diputados, me gustaría hacer mención a las modificaciones e inclusiones al proyecto original que me parecen importantes:

- En el artículo 4º, inciso *i*), *in fine*, la generación de valor agregado dentro del territorio nacional y provisión de nuevas y más eficientes tecnologías y servicios.

- En el mismo artículo, inciso *k*), que se promueva el desarrollo de proyectos que preserven el medio ambiente y la sustentabilidad económica, social y ambiental del área donde se vayan a ejecutar –a lo cual no se hacía mención en el primer proyecto–.

- El agregado al artículo 5º, que trata sobre la protección y el cuidado ambiental, que obliga a que se especifiquen las obligaciones de cada una de las partes del contrato, los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones que la legislación en esa materia les imponga y la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.

- En el artículo 6º, que el impacto fiscal de los compromisos asumidos sea informado al Congreso de la Nación y que sean incorporados al presupuesto tanto los proyectos iniciados y no concluidos y los adjudicados pero no comenzados.

- En el artículo 9º, inciso *i*), se establece que, si las partes invocan desequilibrio económico financiero, la Unidad de Contratación Público-Privada puede solicitar un informe a la Procuración del Tesoro de la Nación, lo cual me parece importante ya que en la actualidad, por ejemplo con las obras viales, las empresas redeterminan precios tal vez dos o tres veces sin haber comenzado la obra y sin invertir un peso. Dicha modalidad trae como consecuencia que con las redeterminaciones de precios se consuma casi o más de la mitad del presupuesto para la obra.

- Al igual que en el inciso *i*), cuando habla de la posibilidad de cesión, se incorpora nuevamente la intervención de la Procuración del Tesoro, que va a dictaminar sobre los riesgos que pueda asumir el Estado nacional con la obra –esto en el proyecto original no estaba–.

- Creo importante también, como lo señala el inciso *k*), la constitución de un panel técnico idóneo que va a dirimir cualquier cuestión que se suscite entre las partes.

- El proyecto de Diputados en varios artículos incluye a las pyme, fomenta la industria y el trabajo nacional –artículo 12– estableciendo que los bienes y servicios tengan como mínimo un 33 % de

componentes nacionales, y que las preferencias de la ley 25.551 a favor de los bienes nacionales se apliquen a esta ley de PPP.

– El artículo 13, inciso f), dice que deberán indicar las empresas la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que se estima que serán generados a través del proyecto, como así también el porcentaje de participación de industria nacional y de pymes que tendrán lugar durante la ejecución del proyecto.

El proyecto de ley es equitativo y eficiente respecto al riesgo: caso fortuito, fuerza mayor, hecho del príncipe, extinción anticipada del contrato, alea extraordinaria del contrato. Establece estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones asumidas y hace hincapié en la necesidad de preservar el equilibrio económico financiero original y las posibilidades de financiamiento.

Considero que este proyecto de ley abre una cantidad de posibilidades interesantes para el desarrollo de proyectos de infraestructura que, manteniendo la tutela de los intereses públicos y privados comprometidos en estas contrataciones, resulte moderno, ágil y competitivo frente a las opciones tradicionales de contratación de la Administración Pública nacional en contextos de riesgos tales como la emergencia económica, la inflación, etcétera, y de cara a lo que sucede en la propia región y en el mundo, donde, como comenté, se incorporan y desarrollan regímenes de contratación público-privada, algunos desde hace muchos años.

Veo como una posibilidad la de desarrollar muchos más proyectos de infraestructura en un menor período de tiempo, ya que el Estado no puede afrontar el costo y tampoco es posible que solo el sector público se haga cargo de todo. Me parece que trabajando mancomunadamente ambos sectores y cumpliendo cada uno con sus obligaciones podemos llegar a tener una nueva modalidad contractual del Estado que sea eficiente, eficaz y permita el crecimiento del país en cuanto a infraestructura, que en muchos ámbitos hace muchos años que no experimenta.

Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto mi voto positivo al Orden del Día N° 951/16.

4

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA

Desarrollo de la Marina Mercante nacional e integración fluvial regional. (O.D. N° 822/16.)

Creación del Régimen de Incentivos, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval (O.D. N° 823/16.)

Señor presidente:

Los proyectos en tratamiento son de capital importancia para nuestro país debido a la extensa red fluvial y marítima, no sólo en virtud de la explotación ictícola, sino, fundamentalmente, en virtud de todo lo que hace al comercio. Valga traer a colación en este sentido que fue justamente la política implementada por el Primer Plan Quinquenal del general Perón la que llevó a que en la década de 1960, sobre la base de lo realizado por el gobierno justicialista, se fundara la hoy desaparecida Empresa Líneas Marítimas Argentinas, la célebre ELMA, empresa de capital nacional legendaria en su sector, con el asesoramiento de uno de los armadores más importantes del sector a nivel mundial como lo fue don Alberto Dodero.

Hoy, que prima la comercialización de grandes volúmenes de mercaderías, el transporte marítimo, por costo, es el más económico, por lo que todos los incentivos que se le puedan dar coadyuvarán al Estado a desarrollar este sector, el terciario, en grado sumo. Si a ello le adosamos la industria naval, a través de la fabricación de buques, barcasas e insumos, el círculo cierra de manera virtuosa porque no sólo se utilizarán estas naves para la comercialización, sino que su construcción y reparación pasarán por manos nacionales.

Estos incentivos, señor presidente, en un país como la Argentina, en el cual disponemos de los recursos humanos para la fabricación de buques de diversa envergadura así como de la tecnología y del conocimiento para hacerlo, dejan al descubierto la necesidad de que estas iniciativas sean puestas en inmediata marcha para no perder más tiempo, precisamente, en un sector en el que nuestro país algunas décadas atrás fue uno de los más desarrollados, de la mano del armador Dodero y del no menos célebre Onassis, que, huelga señalar, comenzó en nuestro país y fue el armador más importante del mundo a lo largo de cuatro décadas.

Señor presidente: por lo esbozado, estos proyectos de ley tienen un claro objetivo, que es generar trabajo genuino, que es lo que necesita de manera imperiosa nuestro país. Subrayamos que el perfil de las mercaderías por transportar desde la Argentina hacia el extranjero no debería ser como en gran parte del siglo XX, en que se transportaban *commodities* sin valor agregado. Ahora tenemos que exportar, pero con

10

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIACOPPO

Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados (O.D. N° 951/16.)

Señor presidente:

En un principio el litio se utilizaba para la producción de cerámicos y de algunos psicofármacos, entre otros productos. Los avances científicos permitieron el descubrimiento de diferentes usos y su capacidad única para almacenar energía, despertando un gran interés en el sector automotor para alimentar los autos eléctricos y, en general, en el mercado mundial para la producción de baterías.

El 80 % de las reservas comprobadas del mineral se encuentran en el llamado “triángulo del litio”, formado por el sur de Bolivia y el norte de Chile y de la Argentina. Esta región tiene la mayor reserva mundial del mineral.

En la Argentina el metal está presente en las provincias de Jujuy, de Salta y de Catamarca. Actualmente hay estudios de factibilidad que demuestran que en mi provincia habría reservas probables de 2.500.000 toneladas, que darían sustentabilidad y abrirían la puerta a inversores.

Un ejemplo en la Puna jujeña es el Salar de Olaroz, donde la empresa Sales de Jujuy opera desde fines de 2015. La empresa encargada de extraer el litio está formada por tres socios estratégicos: dos de capital privado y la empresa minera del gobierno provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado –JEMSE–. Actualmente la planta cuenta con 200 trabajadores, en su mayoría oriundos de la Puna jujeña, y se completa con aproximadamente otros 100, entre contratistas y camioneros.

En la actualidad hay proyectos de inversión por 500 millones de dólares, pudiendo producir 50.000 toneladas por año durante aproximadamente cuatro décadas, además de generar entre 700 y 800 puestos laborales para la etapa de construcción y alrededor de 300 y 400 para la instancia de operación. Este podría ser uno de los proyectos de litio en desarrollo más grande que existe en el mundo hasta la fecha.

Jujuy cuenta con un alto potencial en energía renovable. En lo que es energía solar, es una de las mejores del país. La energía solar en toda la Puna tiene muy buenas mediciones de radiaciones y no por nada la empresa estatal Jujuy Energía Minería Sociedad del Estado antes mencionada se presentó en sociedad con tres empresas chinas para una licitación, en la cual resultó ganadora, para la construcción de la primera planta de generación de energía solar en la Puna jujeña. El proyecto prevé la instalación de una planta de 300 megavatios, que forma parte de la primera etapa de un plan que pretende alcanzar la producción de 2.500 megavatios, en razón de lo cual se sumarán de manera escalonada otras plantas en el territorio provincial.

Esta es la prueba y la razón por la cual estoy a favor de la participación público-privada. Cuando hay gestión de un gobierno progresista, como los del ingeniero Macri y del contador Gerardo Morales, se pueden llevar adelante medidas y proyectos que sean beneficiosos para el país. Esta es la forma de combatir la pobreza y de crear fuentes de trabajo genuinas.

11

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEROTTI

Emergencia social y de las organizaciones de la economía popular. (O.D. N° 907/16.)

Señor presidente:

El proyecto que hoy nos convoca en este recinto es una herramienta necesaria para un gran sector de nuestra sociedad. Nos encontramos ante el compromiso y la obligación de reconocer, legislación mediante, un reclamo legítimo que el sector de la llamada “economía social” viene realizando hace tiempo.

No podemos, presidente, ser ajenos a los números que fueron publicados semanas atrás por el INDEC. Dicho informe sostiene que uno de cada tres personas en la Argentina es pobre, es decir, el 32 % de nuestra población general es pobre. Peor aún es el índice de nuestros jóvenes menores de 14 años: en esa franja estaría el 47 % se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Quiero decir, señor presidente, que no es solo ese informe el que nos preocupa, nos ocupa y nos debe ocupar en esta instancia. Son muchos los índices económicos de consumo y de valor agregado que

Cámara Santafesina de la Industria Naval (CASIN) informa que en el sector se han perdido numerosos puestos de trabajo. El Astillero Ultrapetrol, ubicado en la localidad de Alvear y dedicado a la fabricación de barcas, hasta hace un año contaba con 500 obreros y en la actualidad se encuentran trabajando 70. Asimismo, empresas dedicadas a la reparación de naves hoy han visto reducida su capacidad de producción en un 60 %.

Por otro lado, en lo relativo a los fletes, debemos destacar, como dato relevante, que hoy por el puerto de Rosario salen cerca de 90 millones de toneladas de carga, que es transportada en un 100 % por buques extranjeros, lo que implica que nuestro país pierde el valor agregado del servicio de fletes, que se estiman entre 5.000 y 6.000 millones de dólares por año. Esto demuestra que la bandera argentina no es rentable para los buques de flete.

Indudablemente esto se produce por algunas asimetrías con el sector de otros países de la región. De un estudio realizado por CASIN surge que la presión impositiva en la Argentina es del 76,8 %, mientras que en Paraguay es del 36,5 %.

Por todo esto, señor presidente, y en el firme convencimiento de que ambos proyectos son una herramienta necesaria y constituyen un marco para el desarrollo integral de la región, de la industria nacional dentro de un sistema competitivo, considero que debemos avanzar en la aprobación de este proyecto, en su aprobación, no solo porque estamos apoyando y fomentando nuestra industria nacional, sino que además estamos reivindicando nuestra posición de importancia geopolítica en la región con la posibilidad de volver a tener una flota nacional de calidad y competitiva.

14

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PAIS

Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados (O.D. N° 951/16.)

Señor presidente:

El objeto del presente es explicitar las razones que justifican la abstención del suscrito en la votación del Orden del Día N° 951/16 –P.E.-61/16– llevada a cabo en la sesión del día de la fecha, proyecto por el cual se propicia regular al contrato de participación público-privada (PPP).

En primer lugar, cabe mencionar que en el proyecto aprobado por este Honorable Senado se define al mencionado contrato como aquel celebrado entre la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada (en carácter de contratante) y sujetos privados (en carácter de contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, actividades y servicios de inversión productiva, investigación aplicada o innovación tecnológica y servicios conexos a ellos (artículo 1°).

Este primer artículo del proyecto fue modificado en la Honorable Cámara de Diputados, donde se eliminó en la descripción del objeto contractual a los “servicios conexos” a los proyectos en los campos de infraestructura, actividades y servicios de inversión productiva, investigación aplicada o innovación tecnológica. De este modo, de acuerdo con la redacción aprobada, los proyectos de inversión en las áreas indicadas pueden ser objeto de PPP, pero los servicios conexos a dichos proyectos no.

Pues bien, si se tiene en cuenta que en el mismo artículo se dispone, sin modificación alguna, que: “Los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener por objeto, una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento”, cabe suponer que la determinación en cada caso de cuáles son los servicios conexos que no pueden ser objeto de PPP será significativamente compleja.

Además, la exclusión de los servicios conexos de PPP tiene como consecuencia que, si dichos servicios son contratados por el mismo Estado que celebró la PPP, deberán ser contratados por el sistema de contrataciones de la administración nacional (decreto 1023/2001 y su decreto reglamentario 1030/2016), circunstancia que puede generar complicaciones, al combinar un régimen que se pretende flexible (la PPP) y otro que es rígido y que justamente se quiere evitar con el sistema de PPP.

Por otro lado, se agregó en el artículo 4° el inciso k), que establece lo siguiente:

“k) Promover el desarrollo de aquellos proyectos que coadyuven a la preservación del medio ambiente y a la sustentabilidad económico, social y ambiental del área donde éstos se ejecutarán, todo ello de conformidad con la legislación y los acuerdos internacionales vigentes en la materia”.

Esta disposición, más allá de su loable propósito, está erróneamente ubicada en el artículo 4°, porque allí se establecen los lineamientos que deben respetar los contratos que se celebren bajo esta figura, mientras que la norma introducida se refiere al diseño de políticas de priorización de proyectos.

Considero más adecuada la inclusión de esta disposición como último párrafo del artículo 1º o como único párrafo de un nuevo artículo 2º.

Asimismo, en el citado artículo 4º se incluyó un agregado en el inciso l) –la frase en negrita de la transcripción incluida a continuación– que en mi opinión es la más polémica de todas las modificaciones introducidas por la Cámara Baja. El citado inciso, en su nueva versión, establece:

“l) Impulsar la concurrencia de los interesados y la competencia de oferentes, **considerando las externalidades positivas que pueda ocasionar la elección del contratista en los términos previstos en el presente artículo**”.

El agregado efectuado puede generar serios inconvenientes y es pasible de objeciones relevantes. En primer lugar, es sumamente vago, ya que no está claro su significado debido a que en principio las externalidades positivas deben derivar del proyecto y no de quien es contratado para desarrollarlo. Buscar externalidades positivas en el contratista elegido puede llevar al direccionamiento de los pliegos que afecte los otros dos principios declamados en el inciso: la concurrencia y la competencia. Esta disposición es prácticamente la institucionalización del direccionamiento de pliegos y puede ser tildado de inconstitucional no sólo porque permitirá la vulneración de la igualdad entre los oferentes, sino también porque puede distorsionar el mercado, en violación del artículo 42 de la Constitución Nacional.

En otro orden, en el artículo 5º se agregó la parte marcada en negrita a continuación:

“Artículo 5º: En la estructuración de proyectos de participación público-privada, la contratante deberá promover la protección y cuidado ambiental en el ámbito de los mismos, adoptando las medidas de prevención, mitigación, sanción o compensación, según el caso, de los impactos negativos o adversos que eventualmente se ocasionen al ambiente, conforme la normativa vigente y aplicable a cada proyecto. **En la documentación contractual deberán especificarse las obligaciones que, a los fines antes indicados, deberán recaer sobre cada una de las partes del contrato de participación público-privada y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de todas las obligaciones que la legislación aplicable pudiere imponerle en esta materia. A estos fines, previo a la aprobación de la documentación contractual, deberá tomar intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación**”.

Esta incorporación no implica un aporte significativo, porque toda previsión contractual en esta materia tendrá que hacer referencia a la normativa vigente en el momento en que corresponda realizar la actividad relacionada con el ambiente de que se trate (mitigación, reparación, etcétera), máxime teniendo en cuenta la posible duración de estos contratos (hasta 35 años). No puede pretenderse cristalizar en un contrato las obligaciones de las partes en esta materia porque, si la normativa se modifica e impone otras obligaciones, estas deberán cumplirse al momento de realizarse la actividad. Podrá introducirse en los contratos algún nivel de detalle sobre estas actividades atendiendo específicamente a las particularidades del proyecto de que se trate, pero siempre estará la remisión a lo que establezca la normativa aplicable (nacional, provincial y municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) al momento en que corresponda (por ejemplo, se pueden imponer nuevas obligaciones de prevención o de reparación ante un daño concreto, etcétera).

También es objetable la modificación introducida al inciso j) del artículo 9º, para prever que, en caso de que las partes invoquen la existencia de desequilibrio económico-financiero, la unidad de participación público-privada podrá solicitar “informe” de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) al respecto.

Al respecto, cabe señalar que:

a) La PTN no emite informes, sino dictámenes. Conceptualmente son actuaciones distintas.

b) La PTN nunca se pronuncia sobre cuestiones económico-financieras o técnicas. El efecto de la previsión incorporada es que la PTN a lo sumo dirá si, desde el punto de vista jurídico, es viable la recomposición del contrato, pero no se pronunciará sobre el acierto o error del cálculo del desequilibrio que motiva la recomposición ni sobre el mecanismo utilizado para llevarla a cabo. Sobre el particular, se remitirá a lo dicho por las áreas técnicas intervinientes.

c) No se pronunciará sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de la recomposición contractual.

En definitiva, si bien la modificación no es objetable, el control adicional que se incorpora será bastante limitado en la práctica.

Por otra parte, en el artículo 9º, inciso w), se dispone que el panel técnico que puede constituirse para dirimir las controversias de índole técnica a lo largo del contrato deberá estar “integrado por profesionales y/o representantes de universidades nacionales o extranjeras, en todos los casos, de acreditada independencia, imparcialidad, idoneidad y trayectoria nacional e internacional en la materia”.

Normalmente, los paneles técnicos de este tipo de contratos están integrados por representantes de las partes y un tercero elegido por ambas que actúa como presidente. Sobre el particular, parece exagerado pretender la trayectoria “internacional” del integrante.

En el artículo 12 se refuerza significativamente la participación de la industria nacional en estos proyectos, en los siguientes términos:

“En lo relativo a la provisión de bienes y servicios que deba realizarse en el marco de los contratos que se celebren al amparo de la presente ley, los pliegos y demás documentación contractual deberán contener previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan, como mínimo, un treinta y tres por ciento (33 %) de componente nacional. El Poder Ejecutivo nacional determinará qué debe entenderse por ‘componente nacional’ y por ‘desagregación tecnológica’ teniendo en cuenta la clase de bienes y servicios de que se trate y la naturaleza de los proyectos a ser desarrollados. Asimismo, las preferencias establecidas por la ley 25.551 (ley de compra nacional) a favor de bienes de origen nacional resultarán de aplicación en las contrataciones que se efectúen al amparo de la presente ley.

”En casos particulares, el Poder Ejecutivo nacional podrá exceptuar o limitar las exigencias y preferencias mencionadas en el párrafo precedente en aquellas contrataciones en las cuáles la unidad de participación público-privada, mediante dictamen fundado y previa intervención del Ministerio de Producción de la Nación, justifique la conveniencia o necesidad de dicha excepción o limitación en las condiciones o necesidades particulares del proyecto.

”La Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada que se crea mediante la presente ley podrá requerir en todo momento a la unidad de participación público-privada o a la autoridad contratante y respecto de los proyectos en curso, que informe sobre el cumplimiento de las exigencias contenidas en los párrafos anteriores, así como también respecto de la transferencia de tecnología a favor de la industria nacional y la contratación de recursos y talentos humanos radicados en el país”.

Sin poner en discusión el plausible propósito de la norma, cabe mencionar que la decisión de incorporar al menos el 33 % de componente nacional en estos proyectos es sumamente ambiciosa y, en algunos casos, puede llevar a la imposibilidad de desarrollar el proyecto por inexistencia o insuficiencia de industria nacional (en calidad, cantidad o plazos de producción y entrega) para cumplir con ese cupo. En estos casos, es de suma importancia la previsión del segundo párrafo transcrito, que permite al Poder Ejecutivo nacional exceptuar del cumplimiento del cupo en determinados casos. Todo dependerá del proyecto de que se trate: para algunos, se superará holgadamente el 33 % (en la construcción de un hospital, una escuela, una ruta, un puente o una cárcel, por ejemplo, el costo de la obra civil probablemente excederá ese porcentaje), en otros proyectos será mucho más difícil.

En el artículo 15 se establece que los pliegos licitatorios deberán promover en sus pautas de selección del adjudicatario criterios que determinen ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas a favor de las consideradas micro, pequeñas y medianas empresas, conforme lo establecido en la ley 25.300, salvo que la unidad de participación público-privada que se crea mediante la presente ley, mediante informe fundado, justifique la conveniencia o necesidad de su exclusión en las condiciones y necesidades particulares del proyecto.

Esta incorporación presenta otro problema. La mayoría de los proyectos que se harán en el marco de un contrato de PPP serán grandes obras de infraestructura (al menos, ese es el objetivo declarado). Las grandes obras de infraestructura se financian, en muchos casos, con créditos de las entidades multilaterales de crédito (Banco Mundial-BIRF, BID, CAF, etcétera). Por lo general, esas entidades son reacias a aceptar cláusulas de preferencia por empresas o bienes y servicios nacionales. Por lo tanto, la inclusión de esas preferencias en los pliegos puede ser un obstáculo para acceder a este tipo de financiamiento, que suele ser el más conveniente.

En el artículo 16 se agregó que, cuando los contratos se paguen con recursos públicos, el compromiso presupuestario para ejercicios futuros podrá ser otorgado en la respectiva ley de presupuesto general o en ley especial, siempre y cuando el *stock* acumulado por los compromisos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos, asumidos por el sector público no financiero en los contratos de participación público-privada calculados a valor presente, no exceda el siete por ciento (7 %) del producto bruto interno a precios corrientes del año anterior. Además, se agrega que este límite podrá ser revisado anualmente, junto al tratamiento de la ley de presupuesto, teniendo en cuenta los requerimientos de infraestructura y servicios públicos en el país y el impacto de los compromisos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Sobre el particular, vale decir que este límite es destacable como pauta presupuestaria, para evitar la sobreexposición del tesoro nacional ante la acumulación de estos contratos. No obstante, desde el punto de vista jurídico no tiene ningún efecto. Esto es así porque las futuras leyes de presupuesto o leyes especiales que incorporen las partidas respectivas podrán exceder ese 7 %, sin que pueda objetarse

jurídicamente, porque la ley posterior deroga a la anterior y la especial prevalece sobre la general, ya que el legislador no se autolimita debido a que los únicos límites que tiene al legislar son la Constitución y los tratados (conf. CSJN, “Zofracor”, Fallos: 325:2394, respecto de la limitación que establece el artículo 20 de la ley 24.156 para las leyes de presupuesto).

En el artículo 23 se incluyó entre los que no pueden ser oferentes a quienes estén procesados por auto firme y los condenados por alguno de los delitos previstos en los títulos XI (delitos contra la Administración Pública), XII (delitos contra la fe pública) y XIII (delitos contra el orden económico y financiero) del Código Penal de la Nación, inciso *h*). En este punto debería aclararse que dichos títulos pertenecen al libro II del Código Penal.

Por último, se incorpora entre las disposiciones transitorias el artículo 32, que establece para el ejercicio 2017 un tope del 5 % del presupuesto general de la nación para utilizar en proyectos de PPP, debiendo para los años subsiguientes indicar con precisión en el proyecto de presupuesto las partidas presupuestarias destinadas a estos proyectos.

Cabe recordar que, como ya destacó, en la Honorable Cámara de Diputados se incorporó también como límite general la utilización de recursos destinados a contratos de PPP del 7 % del producto bruto interno anual. La diferencia de criterio al adoptar el límite para el ejercicio 2017 es notoria, ya que se fija en el 5 % del presupuesto general (sin aclarar si es el 5 % de los gastos o de los recursos presupuestados). De este modo, el límite para 2017 es muy inferior que para los años futuros.

Por las razones expuestas, en atención a que varias de las modificaciones introducidas por la Cámara baja son pasibles de objeciones, he optado por abstenerme en la votación del proyecto de referencia del día de la fecha.

15

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PAIS

Sustitución del artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. N° 584/16.)

Modificación del artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. N° 586/16.)

Modificación del artículo 54 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. N° 911/16.)

Modificación del artículo 255 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. N° 916/16.)

Señor presidente:

Están a consideración de los señores senadores cuatro proyectos de mi autoría, y también del diputado Héctor Recalde, en el caso de los tres primeros, que tienen como finalidad mejorar y perfeccionar aspectos del derecho del trabajo en favor de la parte más débil de la relación laboral: el trabajador.

En primer lugar se pretende modificar el artículo 54 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el que quedará redactado de la siguiente manera: “Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescripto en el artículo anterior”.

El mencionado artículo regula la validez de los registros, planillas y otros elementos de contralor establecidos por los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. El presente proyecto de ley de mi autoría, de cuando era diputado nacional, y del diputado Recalde, venido en revisión, busca incorporar aquellos registros especiales, planillas u elementos de contralor que son creados por otras leyes –tales como el registro especial de horas extras y las planillas de control horario creadas por la ley 11.544– que, de no incorporarse, se encuentran excluidas de la presunción prevista en el artículo 55 de la LCT, en virtud de que esta norma sólo reenvía al libro del artículo 52 de la LCT y a los registros u otros elementos regulados en los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo.

Con la modificación proyectada se persigue incorporar la aplicación de la presunción *iuris tantum* a la falta de exhibición de los registros, planillas y otros elementos de contralor creados no solo por los convenios colectivos de trabajo y los estatutos profesionales, sino también aquellos en cuanto fueran exigidos al empleador por la legislación laboral, normas reglamentarias y se los incluye en la norma de valoración judicial en casos de falencia en el cumplimiento de algunas formalidades prescriptas para tales registros.

Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario señalar que la mayoría de la jurisprudencia en la materia extiende, pretorianamente, la presunción *iuris tantum* del artículo 55 de la LCT a la omisión total o parcial de cumplimiento de la obligación de llevar libros y registros regulados por las leyes, pero